

35/

Cesantías:	\$ 6.025.978
Intereses a las Cesantías:	\$ 645.641
SUBTOTAL	\$ 17.274.409

2016

Prima de Servicios:	\$ 1.593.144
Prima de Vacaciones:	\$ 1.865.134
Vacaciones:	\$ 2.735.531
Prima de Navidad:	\$ 3.885.694
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.060.770
Cesantías:	\$ 6.771.746
Intereses a las Cesantías:	\$ 725.545
SUBTOTAL	\$ 18.637.564

2017

Prima de Servicios:	\$ 1.659.625
Prima de Vacaciones:	\$ 1.958.713
Vacaciones:	\$ 2.872.781
Prima de Navidad:	\$ 4.080.649
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.105.988
Cesantías:	\$ 7.517.514
Intereses a las Cesantías:	\$ 805.449
SUBTOTAL	\$ 20.000.719

DIFERENCIA AÑO 2013	\$ 637.594
DIFERENCIA AÑO 2014	\$ 1.084.753
DIFERENCIA AÑO 2015	\$ 2.447.908
DIFERENCIA AÑO 2016	\$ 3.150.626
DIFERENCIA AÑO 2017	\$ 3.853.344

TOTAL	\$ 11.174.225
--------------	----------------------

GRADO 14

REMUNERACIONES PERCIBIDAS (no se tomó la bonificación judicial como factor de liquidación)

2013

Prima de Servicios:	\$ 1.351.369
Prima de Vacaciones:	\$ 1.517.099
Vacaciones:	\$ 2.225.079
Prima de Navidad:	\$ 3.160.622
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 919.150
Cesantías:	\$ 3.834.888
Intereses a las Cesantías:	\$ 410.881
SUBTOTAL	\$ 13.419.088

36/

2014

Prima de Servicios:	\$ 1.390.992
Prima de Vacaciones:	\$ 1.561.581
Vacaciones:	\$ 2.290.319
Prima de Navidad:	\$ 3.253.293
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 946.100
Cesantías:	\$ 3.947.329
Intereses a las Cesantías:	\$ 422.928
SUBTOTAL	\$ 13.812.542

2015

Prima de Servicios:	\$ 1.455.925
Prima de Vacaciones:	\$ 1.634.447
Vacaciones:	\$ 2.397.189
Prima de Navidad:	\$ 3.405.160
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 990.264
Cesantías:	\$ 4.131.594
Intereses a las Cesantías:	\$ 442.671
SUBTOTAL	\$ 14.457.250

2016

Prima de Servicios:	\$ 1.520.858
Prima de Vacaciones:	\$ 1.707.313
Vacaciones:	\$ 2.504.059
Prima de Navidad:	\$ 3.557.027
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.034.428
Cesantías:	\$ 4.315.859
Intereses a las Cesantías:	\$ 462.414
SUBTOTAL	\$ 15.101.958

2017

Prima de Servicios:	\$ 1.585.791
Prima de Vacaciones:	\$ 1.780.179
Vacaciones:	\$ 2.610.929
Prima de Navidad:	\$ 3.708.894
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.078.592
Cesantías:	\$ 4.500.124
Intereses a las Cesantías:	\$ 482.157
SUBTOTAL	\$ 15.746.666

REMUNERACIONES QUE DEBIERON CANCELARSE (tomando la bonificación judicial como factor de liquidación)

2013

Prima de Servicios:	\$ 1.384.929
Prima de Vacaciones:	\$ 1.575.401
Vacaciones:	\$ 2.310.588
Prima de Navidad:	\$ 3.282.085

37/

Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 919.150
Cesantías:	\$ 4.534.555
Intereses a las Cesantías:	\$ 485.845
SUBTOTAL	\$ 14.492.553

2014

Prima de Servicios:	\$ 1.489.485
Prima de Vacaciones:	\$ 1.638.605
Vacaciones:	\$ 2.403.287
Prima de Navidad:	\$ 3.413.761
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 946.100
Cesantías:	\$ 5.197.575
Intereses a las Cesantías:	\$ 556.883
SUBTOTAL	\$ 15.645.696

2015

Prima de Servicios:	\$ 1.638.605
Prima de Vacaciones:	\$ 1.732.303
Vacaciones:	\$ 2.540.711
Prima de Navidad:	\$ 3.608.964
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 990.264
Cesantías:	\$ 5.993.578
Intereses a las Cesantías:	\$ 642.169
SUBTOTAL	\$ 17.146.594

- 2016

Prima de Servicios:	\$ 1.787.725
Prima de Vacaciones:	\$ 1.826.001
Vacaciones:	\$ 2.678.135
Prima de Navidad:	\$ 3.804.167
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.034.428
Cesantías:	\$ 6.789.581
Intereses a las Cesantías:	\$ 727.455
SUBTOTAL	\$ 18.647.492

2017

Prima de Servicios:	\$ 1.936.845
Prima de Vacaciones:	\$ 1.919.699
Vacaciones:	\$ 2.815.559
Prima de Navidad:	\$ 3.999.370
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.078.592
Cesantías:	\$ 7.585.584
Intereses a las Cesantías:	\$ 812.741
SUBTOTAL	\$ 20.148.390

DIFERENCIA AÑO 2013	\$ 680.011
DIFERENCIA AÑO 2014	\$ 1.188.446
DIFERENCIA AÑO 2015	\$ 2.689.344

28

2017

Prima de Servicios:	\$ 2.242.490
Prima de Vacaciones:	\$ 2.517.503
Vacaciones:	\$ 3.692.337
Prima de Navidad:	\$ 5.244.800
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.525.258
Cesantías:	\$ 6.363.693
Intereses a las Cesantías:	\$ 681.824
SUBTOTAL	\$ 22.267.905

REMUNERACIONES QUE DEBIERON CANCELARSE (tomando la bonificación judicial como factor de liquidación)

2013

Prima de Servicios:	\$ 1.944.810
Prima de Vacaciones:	\$ 2.204.191
Vacaciones:	\$ 3.232.813
Prima de Navidad:	\$ 4.592.065
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.299.960
Cesantías:	\$ 6.130.625
Intereses a las Cesantías:	\$ 656.853
SUBTOTAL	\$ 20.061.317

2014

Prima de Servicios:	\$ 2.001.001
Prima de Vacaciones:	\$ 2.287.272
Vacaciones:	\$ 3.354.666
Prima de Navidad:	\$ 4.765.151
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.338.178
Cesantías:	\$ 6.878.215
Intereses a las Cesantías:	\$ 736.952
SUBTOTAL	\$ 21.361.435

2015

Prima de Servicios:	\$ 2.092.684
Prima de Vacaciones:	\$ 2.410.198
Vacaciones:	\$ 3.534.957
Prima de Navidad:	\$ 5.021.247
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.400.538
Cesantías:	\$ 7.726.522
Intereses a las Cesantías:	\$ 827.842
SUBTOTAL	\$ 23.013.988

2016

Prima de Servicios:	\$ 2.184.367
Prima de Vacaciones:	\$ 2.533.124
Vacaciones:	\$ 3.715.248

Prima de Navidad:	\$ 5.277.343
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.462.898
Cesantías:	\$ 8.574.829
Intereses a las Cesantías:	\$ 918.732
SUBTOTAL	\$ 23.013.988

2017

Prima de Servicios:	\$ 2.276.050
Prima de Vacaciones:	\$ 2.656.050
Vacaciones:	\$ 3.895.539
Prima de Navidad:	\$ 5.533.439
Bonificación por Servicios Prestados:	\$ 1.525.258
Cesantías:	\$ 9.423.136
Intereses a las Cesantías:	\$ 1.009.622
SUBTOTAL	\$ 26.319.094

DIFERENCIA AÑO 2013	\$ 524.639
DIFERENCIA AÑO 2014	\$ 914.348
DIFERENCIA AÑO 2015	\$ 2.566.901
DIFERENCIA AÑO 2016	\$ 2.566.901
DIFERENCIA AÑO 2017	\$ 4.051.189

TOTAL	\$ 10.623.978
--------------	----------------------

LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

Es parte demandada en este proceso la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, representados legalmente por el señor DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL o por quien haga sus veces o tenga su representación.

Los demandantes JOSE ANTONIO MORON NUÑEZ, NORALBA NINCO BERMUDEZ, SAIDA ANDREA MACHUCA LOPEZ, JOSEFINA OLAYA, JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA y RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO, representados judicialmente por el suscrito apoderado.

El señor Agente del Ministerio Público en los términos del artículo 303 del C.P.A.C.A.

PRUEBAS

Respetuosamente solicito se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes:

Documentales:

1. Copia de la solicitud de pago de diferencias adeudadas al señor JOSE ANTONIO MORON NUÑEZ, elevada el 22 de mayo de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2. Copia de la solicitud de pago de diferencias adeudadas a la señora NORALBA NINCO BERMUDEZ, evada el 18 de abril de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3. Copia de la solicitud de pago de diferencias adeudadas a la señora SAIDA ANDREA MACHUCA LOPEZ, elevada el 16 de abril de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4. Copia de la solicitud de pago de diferencias adeudadas a la señora JOSEFINA OLAYA, elevada el 16 de abril de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
5. Copia de la solicitud de pago de diferencias adeudadas al señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA, elevada el día 30 de mayo de 2018.
6. Copia de la solicitud de pago de diferencias adeudadas al señor RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO, elevada el 12 de junio de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
7. Copia auténtica de la Resolución No. 4367 del 29 de mayo de 2018, por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió no acceder a la solicitud de pago de diferencias salariales y prestacionales reclamadas por el señor JOSE ANTONIO MORON NUÑEZ.
8. Copia auténtica de la Resolución No. 4607 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió no acceder a la solicitud de pago de diferencias salariales y prestacionales reclamadas por la señora NORALBA NINCO BERMUDEZ.
9. Copia auténtica de la Resolución No. 4613 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió no acceder a la solicitud de pago de diferencias salariales y prestacionales reclamadas por la señora SAIDA ANDREA MACHUCA LOPEZ.
10. Copia auténtica de la Resolución No. 4614 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió no acceder a la solicitud de pago de diferencias salariales y prestacionales reclamadas por la señora JOSEFINA OLAYA.
11. Copia auténtica de la Resolución No. 4693 del 19 de junio de 2018, por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió no acceder a la solicitud de pago de diferencias salariales y prestacionales reclamadas por el señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA.
12. Copia auténtica de la Resolución No. 4697 del 19 de junio de 2018, por medio de la cual el Director Ejecutivo de Administración Judicial resolvió no acceder a la solicitud de pago de diferencias salariales y prestacionales reclamadas por el señor RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO.
13. Constancia laboral del señor JOSE ANTONIO MORON NUÑEZ, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
14. Constancia laboral de la señora NORALBA NINCO BERMUDEZ, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
15. Constancia laboral de la señora SAIDA ANDREA MACHUCA LOPEZ, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
16. Constancia laboral de la señora JOSEFINA OLAYA, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
17. Constancia laboral del señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
18. Constancia laboral del señor RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
19. Original de la constancia expedida por el Procurador 147 Judicial II para asuntos Administrativos.

20. Copia en CD de la presente demanda y de los poderes otorgados al suscrito por los demandantes, en formato PDF.

Oficios:

Comendidamente solicito se ordenen librar los siguientes oficios:

1. A la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se sirvan remitir con destino a este proceso, certificación de tiempo de servicio, cargos desempeñados y remuneraciones percibidas por todo concepto por los demandantes JOSE ANTONIO MORON NUÑEZ, NORALBA NINCO BERMUDEZ, SAIDA ANDREA MACHUCA LOPEZ, JOSEFINA OLAYA, JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA y RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO.

ANEXOS

Anexo a la presente solicitud los siguientes documentos:

1. Poder para actuar, debidamente otorgado al suscrito apoderado.
2. Las pruebas relacionadas en el correspondiente capítulo.
3. Copia para el archivo del Despacho.
4. Copia para el traslado a la demandada.
5. Copia para el Ministerio Público.
6. Copia para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

NOTIFICACIONES

Los demandantes reciben notificaciones en la Calle 72 No. 7 - 96 de la ciudad de Bogotá.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial recibe notificaciones en la Calle 72 No. 7 - 96 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico para notificaciones judiciales: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

El suscrito, en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 7 No. 17-51 Edificio Séptima, oficina 701, teléfono 2841957 - 2866863 de Bogotá, correo electrónico germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar y en la Secretaría de su Despacho.

Cordialmente,


GERMAN CONTRERAS HERNANDEZ
C. C. 79.609.109 de Bogotá
T.P. 96.999 del C.S.J.





JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

43

INFORME AL DESPACHO

Al Despacho del Dr. **GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO**

18 de Junio de 2019

SE INFORMA AL SEÑOR JUEZ QUE LE CORRESPONDIÓ POR REPARTO **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, PRESENTADO ANTE LA OFICINA DE APOYO PARA LOS JUECES ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ D.C., EL **21/05/2019** EN **0** FOLIOS. PARA PROVEER.-


ANDREA SANABRIA ESPINOSA
Secretaria

110013335011201900214



**JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019)

Proceso No: 2019 – 00214

Demandante: JOSEFINA OLAYA

**Demandado: LA NACIÓN – RAMA EJECUTIVA –
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL**

Asunto: TRAMITE DE IMPEDIMENTO

*Se encuentra el presente expediente al Despacho para decidir acerca de avocar conocimiento del proceso formulado por la actora **JOSEFINA OLAYA**, previas las siguientes consideraciones:*

De la lectura de las pretensiones contenidas en la demanda, así como las peticiones elevadas en vía gubernativa, se desprende que la demandante presta sus servicios para la Rama Judicial en el cargo de Asistente Administrativo Grado 08 y aspira a obtener la reliquidación y pago retroactivo, indexado, con los respectivos intereses moratorios y sanciones por la mora en el pago, del reajuste de la asignación mensual y de todas las prestaciones sociales recibidas desde el 1 de enero de 2013 hasta que se haga el reajuste y en adelante, en virtud de la bonificación judicial mensual reconocida mediante Decreto 0384 de 2013, como remuneración con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales incluidas las cesantías e intereses a la cesantías de esta bonificación mensual como salario.

Con fundamento en los hechos y las normas que se invocan para soportar las pretensiones contenidas en la presente demanda, estima el suscrito funcionario que se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista por el numeral 1° del

artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aunado al hecho que al suscrito operador judicial como a la actora se nos viene cancelando de manera periódica mes a mes la bonificación judicial, la cual no ha tenido incidencia para la liquidación de las prestaciones sociales, ignorando la demandada la naturaleza salarial que la misma comporta.

De lo anterior, se logra inferir que se estableció dicha bonificación y que es pagada actualmente para los empleados y funcionarios de la rama judicial, en virtud del Decreto 0384 de 2013, en desarrollo de la ley 4ª de 1992; bonificación judicial que es cancelada en forma habitual y periódica a partir de enero 2013, lo cual implica interés directo tanto del suscrito, que ya cuenta con sentencia favorable ejecutoriada como de todos los jueces administrativos.

Ahora bien, el numeral segundo del artículo 131 del C.P.A.C.A., dispone:

"Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto." (Negrilla del Despacho).

La norma transcrita prescribió un trámite especial para los impedimentos de los Jueces Administrativos, cuando concurra una causal que comprenda a todos, evento en el cual se ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la finalidad de que dicha Corporación, designe un conjuez a efectos de que a la mayor brevedad posible se resuelva lo que en derecho corresponde.

Así las cosas, el Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, atendiendo la nueva regulación de los impedimentos contenida en la Ley 1437 de 2011, y con el propósito de garantizar los principios de economía, celeridad procesal y de juez natural.

RESUELVE:

PRIMERO: **DECLARARSE IMPEDIDO** para conocer del presente proceso, por asistir interés directo en las resultas del mismo, (causal 1ª – art. 150 C.P.C. y numeral 2º del art. 131 del C.P.A.C.A.).

SEGUNDO: **REMITIR** el expediente al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo que estime procedente, conforme las razones vertidas en la presente providencia.

CÚMPLASE,


GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO
JUEZ



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECRETARÍA GENERAL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
OFICIO N° SG 3468-2019

Señores

JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
E.S.D.

RECEBIDO J11Z6 ADMTTUN

OCT 23 19 AM 10:41

Proceso: 11001333501120190021401

Demandante: JOSEFINA OLAYA

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Cordial Saludo:

Atentamente, me permito informarle que en el proceso de la referencia le fue aceptado el impedimento a los jueces de Bogotá, Zipaquirá, Facatativá, Girardot y Leticia, siendo designado para continuar con el trámite el Juez Ad Hoc **MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO**, en sorteo realizado el pasado veinticinco (25) de octubre de 2019, por lo cual le remito el expediente en **2** cuadernos con **5** y **45** folios, **1** traslados y **0** cds.

No sobra señalar que, el expediente queda bajo la custodia exclusiva del Despacho que lo recibe.

Atentamente,


ALEJANDRO BAUTISTA CASTELBLANCO

Secretario General



JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA

47

Al Despacho del Dr. MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO

Hoy

29 de Octubre de 2019

PASA CON ASIGNACIÓN DE JUEZ AD HOC.- PARA PROVEER.-


ANDREA SANABRIA ESPINOSA
Secretaria

No. 11001333501120190021400

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO AD-HOC
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ- SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C,

5 - MAR. 2020

JUEZ ADHOC: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
MEDIO CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
PROCESO No: 11001-33-35-011-2019-00214-00
DEMANDANTE: JOSEFINA OLAYA
DEMANDADO: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL
TEMA: BONIFICACIÓN JUDICIAL

Que el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca me designó como Juez – Ad Hoc dentro del expediente de la referencia, se procederá en tal calidad a asumir el conocimiento del medio de control de la referencia, lo anterior de conformidad con lo normado en la Ley 270 de 1996, y demás normas concordantes y complementarias, en consecuencia, se procede a resolver lo que en derecho corresponda.

En consecuencia, para su trámite se dispone:

1. **ASUMIR** el conocimiento del presente proceso.
2. Se admite para tramitar en PRIMERA INSTANCIA la demanda formulada a través de apoderado por la señora JOSEFINA OLAYA, en ejercicio del medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL.
3. **NOTIFIQUESE** personalmente esta providencia a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo previsto en los artículos 197, 198 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. **NOTIFIQUESE** personalmente esta providencia a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, ante este Despacho Judicial.
5. **NOTIFIQUESE** personalmente esta providencia al señor Agente del Ministerio Público ante este Despacho Judicial.
6. **CÓRRASE** traslado de la demanda a los sujetos procesales notificados mediante la presente providencia por el término de (30) días, para los efectos previstos en el artículo 172 del C.P.A.C.A., término que comenzará a correr de acuerdo con el artículo 612 del Código General del Proceso, modificatorio del artículo 199 del C.P.A.C.A.

7. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, durante el término de traslado, la Entidad Demandada con la contestación de la demanda deberá allegar copia de los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición del acto demandado y todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, se advierte que el desacato a esta obligación constituye falta disciplinaria gravísima, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1°, artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.
8. **ORDENAR** a la parte demandante que dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, radicar en la oficina de correspondencia de la entidad demandada, copia de la presente providencia junto con los respectivos anexos y traslados para efecto de realizar el trámite de que trata el inciso 5° del artículo 199 del CPACA. Realizado lo anterior, deberá aportar las constancias de recibido para que obren en el expediente. El incumplimiento dará lugar a aplicar lo consagrado en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.

En caso de que se requieran gastos del proceso, los mismos deberán estar a cargo de la parte interesada, por tal razón el Despacho se abstiene de fijarlos en este momento.

9. **RECONOCER** personería adjetiva para actuar dentro del presente proceso al Doctor **GERMAN CONTRERAS HERNANDEZ**, identificado con C.C. No. 79.609.109 de Bogotá, portador de T.P. No 96.999 del C.S de la J. como apoderado judicial de la parte demandante.

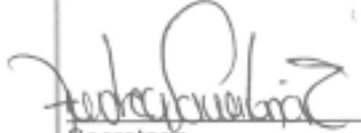
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
JUEZ AD HOC

JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA #007

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la
providencia anterior, hoy ~~6~~ 6 MAR a las 8:00 a.m.


Secretario



**JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 4.**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

CERTIFICA QUE:

Realizó envío de correo electrónico del estado ordinario No. 007 y constitucional 008 de 06 de MARZO de 2020 a las partes, a través del correo electrónico, jadmin11bta@notificacionesrj.gov.co y se remitió a los siguientes correos electrónicos:

Outlook interface showing an email titled "ESTADO ORALIDAD 007 Y CONSTITUCIONAL 008 DE 2020". The email content lists numerous recipients and their email addresses, including:

- projudadm193@procuraduria.gov.co
- procesosnacionales@defensajudicial.gov.co
- Carlos Andres Zambrano Sanjuan
- Cesar Garzon
- VENCESALAMANCABOGADOS@GMAIL.COM
- asesoriasjudicias504@hotmail.com
- Elder Saja
- Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj
- Augusto Contreras Suarez
- IMAHECHA@UGPP.GOV.CO
- organizaciongloble@yahoo.es
- Javier Parra
- ejecutivo@organizacionsanabria.com.co
- notificacionesundinarcabog@gmail.com
- Sharon Lizeth Escobar Trujillo
- Otalora Aldana Juan Camilo
- Silva Monroy Javier Antonio
- zona7bog@gmail.com
- ANDRES MAURICIO CARD BELLO
- YOLANDA GARCIA
- danielsancheztorres@gmail.com
- NOTIFICACIONESJUDICIALES@SECRETARIAJURIDICA.GOV.CO
- asesoriasjudiciascajamarca@hotmail.com
- orjuelaconsultores@gmail.com
- EDWIN MAHECHA
- lawyer_1703@hotmail.com
- gloria.duran@mindefensa.gov.co
- jairocazasabogados@hotmail.com
- josefer_torres@yahoo.com
- IVALDES CABOGADOS@GMAIL.COM
- privatratcabogados@gmail.com
- notificacionesbogota@giraldobogados.com.co
- carloshevanvargas@hotmail.com
- hlozanomoreno@gmail.com
- Notificaciones Judiciales de Casur
- Alfonso Hernandez Acosta
- LINO LOPEZ

Virtualicio X Correo Juzgado 11 Administrativo X +

outlook.office.com/mail/senditem?to=442645262780WML7H4vDQzMSM4jUWmW4jBOG0DNEV2QAG4H4w435F01P4ctwWQ0d3D

Outlook Buscar Juzgado 11 Adm.

Imprimir X Cancelar

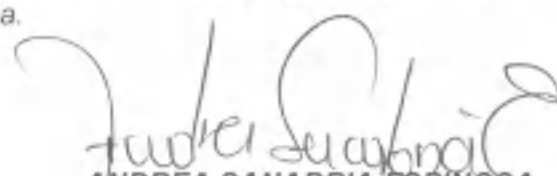
Alcaldía <notificacionesjudiciales@alcaldia.gov.co>; Jurisdicción Constitucional <notificacionesjudiciales@tsc.gov.co>; Línea Luján <linco_lopez125@yahoo.es>; colombiapensiones1@hotmail.com <colombiapensiones1@hotmail.com>; colombiapensiones1@gmail.com <colombiapensiones1@gmail.com>; vigilanciaprocesos@cardenasysasociadosabogados.com <vigilanciaprocesos@cardenasysasociadosabogados.com>; Notificaciones Judiciales - Colpensiones <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; mleytonc.concliatas@gmail.com <mleytonc.concliatas@gmail.com>; cgonzalez.concliatas@gmail.com <cgonzalez.concliatas@gmail.com>; notificacionesvilalobos@hotmail.com <notificacionesvilalobos@hotmail.com>; notificacionesbayonagomez@gmail.com <notificacionesbayonagomez@gmail.com>; harold.rios604@casur.gov.co <harold.rios604@casur.gov.co>; germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar <germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar>; notificacionesjudiciales.ap@gmail.com <notificacionesjudiciales.ap@gmail.com>; ivangonzalezlizarazonotificaciones@hotmail.com <ivangonzalezlizarazonotificaciones@hotmail.com>; a.pasesores@hotmail.com <a.pasesores@hotmail.com>; Claudia Yarneth Cely Calisto <claudia.cely@tiscala.gov.co>; notificacionesjudiciales@jcabezasabogados.com <notificacionesjudiciales@jcabezasabogados.com>; apulido@ugpp.gov.co <apulido@ugpp.gov.co>; enerramatias@gmail.com <enerramatias@gmail.com>; asesoriamariaga@outlook.com <asesoriamariaga@outlook.com>; antoniosanchezmariaga@hotmail.com <antoniosanchezmariaga@hotmail.com>; notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co>; José Ignacio Manrique <nacho.manrique@gmail.com>; notificacionesjudiciales@esesubredcentrooriente.gov.co <notificacionesjudiciales@esesubredcentrooriente.gov.co>; notificaciones@misderechos.com.co <notificaciones@misderechos.com.co>; Notificaciones Judiciales - SutRedSur <notificacionesjudiciales@subredsur.gov.co>; abogada.tyc@gmail.com <abogada.tyc@gmail.com>; César Rubio <notificacionesjud@sic.gov.co>; yesicacontrerassic@gmail.com <yesicacontrerassic@gmail.com>; jelopez@sic.gov.co <jelopez@sic.gov.co>; wfac1979@gmail.com <wfac1979@gmail.com>; jhonecol@gmail.com <jhonecol@gmail.com>; EDWIN MAHECHA <NotificacionesBogota@mindefensa.gov.co>; ardej@policia.gov.co <ardej@policia.gov.co>; roarizabogados@gmail.com <roarizabogados@gmail.com>; Información Ancas <info@ancasconsultoria.com>; angelicalinan@tiscala.gov.co <angelicalinan@tiscala.gov.co>; asesoriasjudicascajamarca@hotmail.com <asesoriasjudicascajamarca@hotmail.com>; notificaciones@wylawyers.com <notificaciones@wylawyers.com>; fredy.rodriiguez4290@hotmail.com <fredy.rodriiguez4290@hotmail.com>; carlosasjudinet@gmail.com <carlosasjudinet@gmail.com>; o.s.abogados@hotmail.com <o.s.abogados@hotmail.com>; fabian655@hotmail.com <fabian655@hotmail.com>; Luz Elena Botero Larrarte <luz.botero@tiscala.gov.co>

2 archivos adjuntos (195 KB)

ESTADO 007.pdf; ESTADO 008.pdf

SE NOTIFICA A LAS PARTES DE LOS ESTADOS ORALIDAD 007 Y CONSTITUCIONAL 008 DE 2020.- ASI MISMO SE LES INFORMA QUE EN ALGUNOS PROCESOS SE HA FIJADO FECHA DE AUDIENCIAS.-

Atentamente,


ANDREA SANABRIA ESPINOSA
 Secretaria

Señores

JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

(JUEZ AD HOC Dr MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO)

E.S.D.

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de **JOSEFINA OLAYA** contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

RAD. 1100 13335011 2019 00214 00

GERMAN CONTRERAS HERNANDEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.609.109 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 96.999 del C.S.J., actuando en calidad de apoderado de la señora **JOSEFINA OLAYA**, mayor de edad, residente en Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.319.304 de Fontibón, demandante en el asunto de la referencia, dando cumplimiento a lo ordenado por el Despacho, atentamente me permito allegar con el presente el recibido por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del Oficio No. 084 del 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se remitió copia íntegra de la demanda, de sus respectivos anexos y del auto admisorio.

Allego lo anunciado.

Cordialmente,

GERMAN CONTRERAS HERNANDEZ
C.C. 79.609.109 de Bogotá
T.P. 96.999 del C.S.J.





JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA

Carrera 57 No. 43 - 91 Piso 4

45-F
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2020 OCT -5 A 10:56

Bogotá, D.C. 30 de septiembre de 2020

COMUNICACIÓN
RECIBIDA
OFICIO N° 084

Señores (as)
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Calle 72 # 7-96
Bogotá D.C.

ASUNTO : CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 199 DE LA LEY
JUICIO : 110013335011201900214 00
NATURALEZA : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE : JOSEFINA OLAYA
DEMANDADO : NACIÓN- RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
JUEZ AD HOC : MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO

De conformidad con lo previsto por el artículo 612 del código general del proceso que modificó el artículo 199 de la ley 1437 de 2013, procedo a dar cumplimiento a lo señalado en el inciso 4 ibídem, por tanto me permito enviar los siguientes documentos respecto al expediente de la referencia:

- copia de la demanda
- copia de los anexos de la demanda
- auto que admite demanda

ANEXO: lo anunciado

Atentamente,

ANDREA SANABRIA ESPINOSA

Secretaría

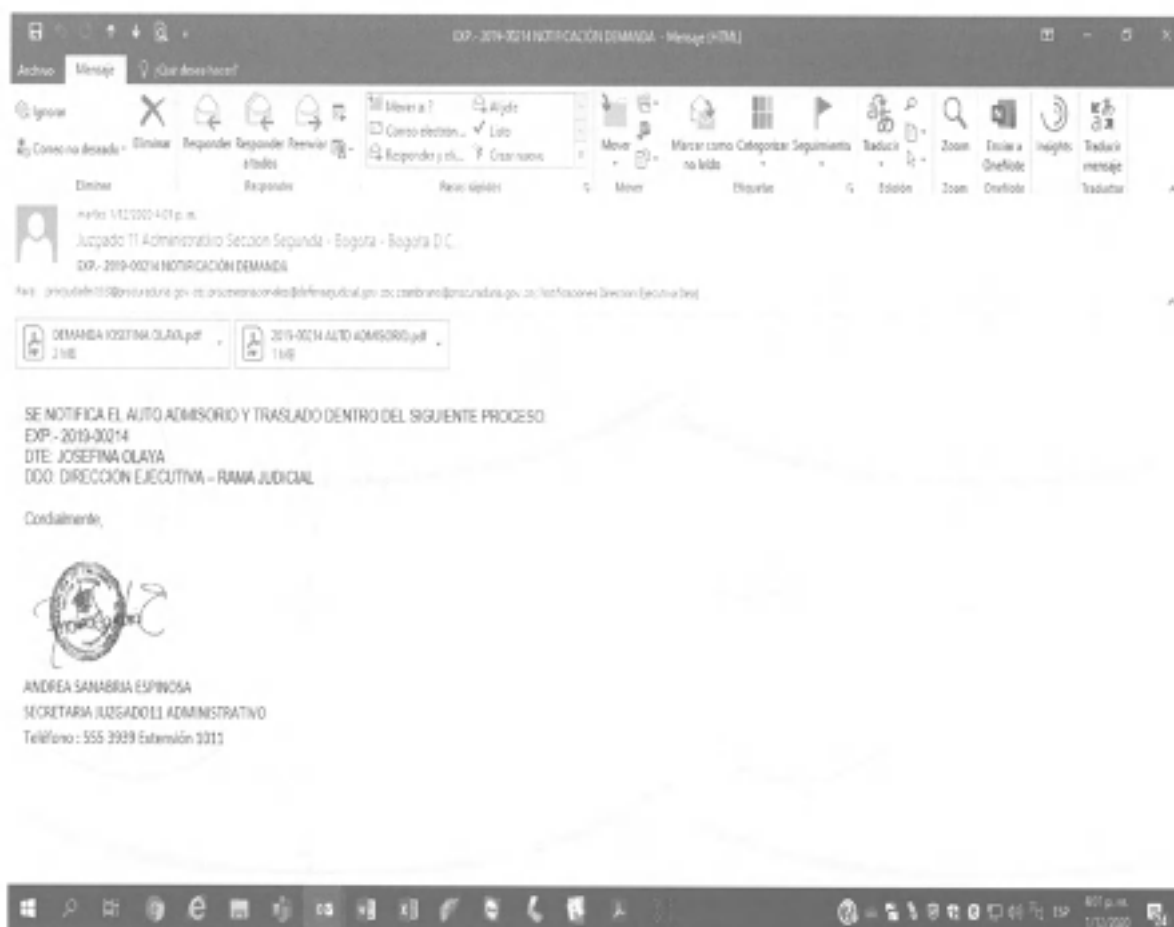


**JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA
Carrera 57. No. 43-91 Piso 4.**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

CERTIFICA QUE:

Se realizó diligencia de notificación personal del auto que admite y la demanda del expediente 209-00214 a través del correo electrónico jadmin11bta@notificacionesrj.gov.co y se remitió a los siguientes:



Se notificó al primer (1º) día del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,



ANDREA SANABRIA ESPINOSA
Secretaria

Juzgado 11 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.

De: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
Enviado el: jueves, 4 de marzo de 2021 10:27 a. m.
Para: Juzgado 11 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
Asunto: RV: CONTESTACION DEMANDA - 11001333501120190021400
Datos adjuntos: 1. ANEXOS PODER - RES. 5393 - DELEGACION REPRESENTACION JUDICIAL.pdf; 2. PODER RAMA JUDICIAL - DEAJALO20 7409.pdf; 3. 2019-00214 - CONTESTACION DEMANDA - DCTO 383 CON PRES.pdf

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
CAMS

De: Angelica Paola Arevalo Coronel <aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:18 p. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar <germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar>
Cc: Angelica Paola Arevalo Coronel <aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co>; Diana Carolina Ramírez Molano <dramirem@deaj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONTESTACION DEMANDA - 11001333501120190021400

Señor
Juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar
Ciudad

Referencia: Expediente: 11001333501120190021400
Naturaleza: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: **JOSEFINA OLAYA**
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo

al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DEAJALO21-1215

Bogotá D. C., 3 de marzo de 2021

Señor

Juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

germancontrerashernandez10@yahoo.com.ar

Ciudad

Referencia: Expediente: 11001333501120190021400
Naturaleza: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: JOSEFINA OLAYA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ANGÉLICA PAOLA ARÉVALO CORONEL, mayor de edad, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL en el proceso de la referencia, de conformidad con el poder conferido por la Directora de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien tiene delegada la función de representación judicial y extrajudicial de la entidad, la cual fue otorgada mediante Resolución No. 5393 del 16 de agosto de 2017, de manera respetuosa me permito presentar, dentro del término legal establecido, **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**, bajo los argumentos que se pasan a exponer:

I.A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas las declaraciones y condenas solicitadas en el libelo de la demanda, y solicito se absuelva de las mismas a la Entidad que represento, declarando probadas las excepciones que se proponen en el acápite correspondiente.

II.A LOS HECHOS

En relación con los hechos, la entidad demandada únicamente acepta los relativos a los cargos desempeñados por la parte actora en la Rama Judicial, así como los extremos temporales que se encuentren debidamente soportados documentalmente.

Así mismo, se aceptan los relacionados con la presentación de la petición en sede administrativa, la expedición del acto que hoy emerge como acusado, y el trámite de conciliación prejudicial, adelantado ante la Procuraduría General de la Nación.

Frente a los demás hechos presentados en la demanda, es pertinente advertir al Despacho que se tratan de enunciaciones normativas, jurisprudenciales y apreciaciones subjetivas de la apoderada de la parte actora.

III.RAZONES DE LA DEFENSA

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador – 3127011 www.ramajudicial.gov.co



SC5790-4



ISO 14001

1. RESUMEN DEL CASO

En la demanda la parte actora solicita se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reliquidar y pagar de manera retroactiva, indexada y con los respectivos intereses moratorios y sanciones por la mora en el pago, el reajuste de la asignación mensual y de todas las prestaciones sociales recibidas desde el año 2013 hasta que se haga el reajuste y en adelante, en virtud de la bonificación judicial mensual reconocida mediante el Decreto No. 0383 de 6 de marzo de 2013, como remuneración con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales incluidas las cesantías e intereses a las cesantías de esta bonificación mensual como salario.

2. FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 150, numeral 19, literales E) y F) de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

En ejercicio de dicha facultad el Legislativo expidió la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual autoriza al Gobierno Nacional, sin restricción alguna, para fijar el régimen salarial y prestacional de los del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones empleados públicos, entre estos los de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los miembros sociales de los Trabajadores Oficiales, para lo cual debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos y criterios: El respeto de los derechos adquiridos tanto del régimen general, como de los especiales; La sujeción al marco general de la política macro económica y fiscal; La racionalización de los recursos público y su disponibilidad; El nivel de los cargos en cuanto a la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.

De manera que es en virtud de la Constitución Política de 1991 y lo establecido en la citada Ley que la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional.

Así pues, nace el Decreto 0383 del 6 de marzo de 2012, *"Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones"*, normativa que estableció lo siguiente:

"...ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" (Se destaca)

En iguales términos fue regulado por el Decreto 384 de 2013 *"por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de*

Hoja No.3

Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones", y por los Decretos 1269 de 2015 y 246 de 2016.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio.

Los Decretos 383 de 2013, 384 de 2013, 1269 de 2015 y 246 de 2016 instituyeron también, cada uno en su respectivo artículo 3º, la siguiente previsión legal:

"... ARTÍCULO 3o. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ..." (Subrayas propias).

Consecuencia de las normas precitadas, es que por expreso mandato legal la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización

al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional, como lo evidencian los decretos expedidos por el Ejecutivo para ajustar el monto de la referida Bonificación en las vigencias 2015 y 2016, quedando por lo tanto resuelta de plano la pretensión del interesado concerniente a "...ajustes equivalentes al IPC del 02%...".

3. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES DE LEGALIDAD Y DE CONSTITUCIONALIDAD QUE AVALAN EMOLUMENTOS LABORALES SIN CARÁCTER SALARIAL

El Consejo de Estado en sentencia del 19 de junio de 2008, Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00043-00 (0867-06), Actor: PABLO J. CACERES CORRALES, Consejero ponente: Dr. JAIME MORENO GARCIA, ratificó el carácter NO SALARIAL de la Bonificación de Actividad Judicial creada por el Decreto No. 3131 del 08 de septiembre de 2005, para Jueces de la República y otros funcionarios, providencia en la que se indicó que las normas que fueron acusadas en el momento en que señalaron que dicha bonificación al señalar que no tendría carácter salarial ni prestacional, no desconocieron ningún derecho adquirido ni violaron las disposiciones constitucionales y legales, que sustentó el demandante en la demanda, ya que precisamente fue creada como una suma adicional al salario, por lo que en ningún momento existió una desmejora del mismo.

Es así que, el legislador está facultado por la propia Constitución para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos, puesto que tiene libertad para disponer qué determinados emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos de salario, resultando en consecuencia que bajo ese presupuesto el ordenamiento que instituyó la Bonificación Judicial de ninguna manera podría considerarse como inconstitucional, ilegal o violatorio de pactos internacionales.

Por su parte, La Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución en sentencia C-279 de 1996 declaró exequible el artículo 14 de la Ley 4° de 1992 en su redacción original, que determinaba que la prima especial allí creada no tendría carácter salarial para ningún efecto, en razón de la libertad de configuración del legislador. Para el efecto tuvo en cuenta la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de febrero de 1993 (radicación 5481), cuando al referirse a la interpretación de los arts. 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia de la Ley 50 de 1990, expuso que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular prestaciones e indemnizaciones, ello no impide que el legislador disponga que alguna prestación social o indemnización se liquide sin el monto total del salario del trabajador, es decir, que se incluyan ciertos factores. Y, concluyó en la providencia que el legislador al determinar que algunas primas no tengan carácter salarial, en ningún momento lesiona los derechos del trabajador.

Al año siguiente, en la sentencia C-444 de 1997 la Corte Constitucional declaró exequible que la Ley 332 de 1996 al modificar el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, le diera efecto a dicha prima exclusivamente para liquidar la pensión y que se excluyera a quienes ya estaban pensionados.

Seis años después, en la sentencia C-681 de 2003 la Corte Constitucional declaró inexecutable la expresión "sin carácter salarial" del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, por violación del principio de igualdad de los funcionarios del artículo 15 con los funcionarios del artículo 14, a quienes se les tiene en cuenta para cotizaciones y liquidación de la pensión por la modificación que en tal sentido introdujo la Ley 332 de 1996 al artículo 14, pero de ningún modo porque se haya considerado que existe el derecho constitucional a que todo pago salarial sea base de liquidación de prestaciones.

Igualmente, y más recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-395 de 2017, reiteró: "...no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter... Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que "el legislador conserva una cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución."

Igualmente y en lo relacionado a la vulneración de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional en la sentencia No. C-410-97 del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, doctor HERNANDO HERRERA VERGARA, expresó, entre otros que los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, por lo tanto, se encuentran garantizados, de tal manera que no pueden ser desconocidos por situaciones futuras; sin embargo, las simples expectativas son diferentes al derecho adquirido, ya que se tratan de aquellas probabilidades o esperanza de obtener algún día un derecho, por lo que pueden ser modificadas por el legislador.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo expresado por la H. Corte Constitucional en la sentencia citada en precedencia, y la filosofía del legislador con la expedición de los Decretos 383 y 384 del 6 de marzo de 2013, claramente expuesta por el Alto Tribunal Constitucional, se tiene que a la parte demandante no se le ha vulnerado derecho adquirido alguno, en consideración a que el derecho que reclama, ha sido creado por el Gobierno Nacional hasta en los Decretos en cita, razón por la que no hacía parte de su patrimonio antes de la expedición del mismo, por lo tanto, no le ha sido arrebatado o vulnerado, pues es a partir de la creación de este concepto salarial y seguidos los lineamientos del ejecutivo como órgano competente en su expedición, que se entró a liquidar y a devengar este concepto. Hasta allí era una expectativa y empezó a formar parte de su patrimonio como lo previó el legislador, sin carácter de factor de salario para liquidar sus prestaciones sociales, así nació y así lo concertaron las partes, Rama Judicial, ASONAL y el ejecutivo, luego entonces, no se violó algún derecho adquirido y no hay lugar a cancelar diferencia prestacional alguna a título de Bonificación Judicial al funcionario judicial.

Es por ello que el Gobierno Nacional no desconoce o lesiona los derechos reclamados, pues los derechos adquiridos son intangibles, y para el caso en estudio, la Bonificación Judicial creada en los Decretos 383 y 384 de 2013, fue el producto de una reclamación salarial a través del paro judicial, que hasta ese momento, era una mera expectativa o esperanza de obtener un derecho, susceptible de ser modificada discrecionalmente por el Gobierno Nacional y que a la postre, se configuró con la expedición de la norma precitada.

4. DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La parte actora en la demanda, solicita sea declarada la excepción de inconstitucionalidad, la cual, constituye un mecanismo otorgado a los funcionarios públicos y a la jurisdicción, para amparar tanto a la Constitución como a los particulares, cuando se ven comprometidos sus derechos fundamentales o constitucionales por la aplicabilidad de una norma legal vigente, pero como la norma no señala cual es el juez competente para conocer de los procesos en los que se propone dicha excepción.

La Corte Constitucional en la Sentencia de tutela T-006 del 17 de enero de 1994, Expediente No. T-20850, Magistrado Ponente: VLADIMIRO NARANJO MESA, frente a la excepción de inconstitucionalidad expresó que, si el Juez encuentra fundada ***“la demanda de inconstitucionalidad, dejará de aplicar la ley, pero únicamente para quien lo solicitó. Al contrario de lo que sucede en la acción de inconstitucionalidad, la ley conserva su eficacia jurídica, es decir, no se anula, y por consiguiente podrá ser aplicada posteriormente, siempre que no se le oponga la excepción de inconstitucionalidad. El objeto de la excepción no es pues la anulación, sino la no aplicación de la ley en el proceso establecido.”*** Y, agregó: *“la excepción sólo puede imponerla la parte interesada dentro del litigio, y no produce efectos sino respecto de ella, es decir, individuales. Por otra parte, a diferencia de la acción, la excepción de inconstitucionalidad no requiere de tribunales especiales, sino que puede ser conocida por los tribunales ordinarios.”*

Esta posición jurisprudencial la reafirmó la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-150 de 1995¹.

¹ “... La Corte ha tenido oportunidad de referirse al tema y sobre el particular, ha manifestado:

En consecuencia, se deduce, que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como autoridades administrativas, agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento, pues no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen esa potestad.

Coprolario de lo anterior y teniendo en cuenta lo preceptuado por el Art. 3° del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se adujo:

"...ARTÍCULO 3o. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ..." (Subrayas propias).

En los mismos términos está regulado en el artículo 2 del Decreto 384 de 2013.

Tampoco le es dable a la Administración acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 0383 de 2013 o del Decreto 0384 de 2013, competencia atribuible única y exclusivamente al Gobierno Nacional.

Sumado a lo anterior, no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición en cita que regula la Bonificación Judicial, toda vez que, como se indicó en el acápite anterior, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución Nacional el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

De manera que no hay lugar a inaplicar por inconstitucional la expresión "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", contenida en el artículo primero de los Decretos N° 0383 y 0384 de 2013, en el entendido de que la bonificación judicial debe constituirse en factor salarial para todas las consecuencias legales que comporte, se debe destacar que la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido del Decreto 383 de 2013 y del Decreto 384 de 2013, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3° y 2°, respectivamente, citado textualmente en párrafos anteriores, razón por la que solicito señor Conjuez, niegue las pretensiones de la demanda y confirme la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, proferidos por la Dirección

"El artículo 4° de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de otro orden a un caso singular."

Hoja No.7

Seccional de Bogotá y Ejecutiva de Administración Judicial, de lo contrario estaría desacatando el ordenamiento legal vigente.

Por otra parte, en la sentencia SU-132 de 2013, la Corte Constitucional señaló que la inaplicación por inconstitucionalidad es una herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

Por tanto, la única posibilidad que tiene la administración de apartarse de las normas es cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que no ocurre en el presente caso, como quiera que los Decretos 383 y 384 de 2013, que crearon la Bonificación Judicial y regulan su liquidación están vigentes, y es en virtud del principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Política, que como autoridad debe acatarlos y cumplirlos, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida estas normas en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del mismo.

En tal virtud, solicito no acceder a las pretensiones de la demanda en el sentido de incluir en la liquidación de las prestaciones sociales de los beneficiarios de la Bonificación Judicial el valor por ésta reconocido como factor de salario (y la cual sólo se debe tomar para los aportes a los sistemas de salud y pensión) y que hoy surgen de la interpretación errada que el servidor judicial tiene de la norma, pues como autoridad administrativa y guardadora del principio de legalidad, a la Administración Judicial le corresponde acatar estrictamente el ordenamiento legal vigente, sin que le sea posible interpretarlo o inaplicarlo, en razón a que son los Jueces en sus respectivos fueros a través de sus sentencias los que tienen tal potestad.

Por lo anterior, no hay lugar a acceder a las pretensiones formuladas por la parte demandante, toda vez que al hacerlo, comportaría la modificación del régimen salarial ya establecido en la ley por la autoridad competente, facultad que no nos está dada.

IV. EXCEPCIONES

1. DE LA VIOLACIÓN DE NORMAS PRESUPUESTALES DE RECONOCERSE LAS PRETENSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

Es menester indicar que la Bonificación Judicial fue regulada sin carácter salarial para efectos prestacionales y que a la fecha los decretos que la reglamentan no han sido declarados nulos, es decir, siguen gozando de presunción de legalidad, por lo tanto es deber de la Dirección Ejecutiva y sus Direcciones Seccionales acatar sus regulaciones, pues, de llegar a reconocerse su carácter salarial para todos los efectos, como lo pretenden los actores, no solo se desconocerían tales decretos, sino que también se iría en directa contravía de las disposiciones de presupuesto, especialmente, de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996¹, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, que prevé:

"ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que se adquiere con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/94, artículo 49)." (Se resalta)

Igualmente, podría desconocerse lo previsto en el Decreto 1068 de 2015², en su artículo 2.8.3.2.1. que establece:

"Artículo 2.8.3.2.1. Disponibilidad y Registro Presupuestal Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS o quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen." (se destaca)

Lo anterior por cuanto no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí

mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

Al respecto, la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en la sentencia C-337 de agosto 19 de 1993, sostuvo que: "las normas orgánicas del presupuesto regulan y limitan la actividad de las diferentes entidades y órganos del Estado, tanto en los actos que pueden realizar en el ejercicio de sus funciones que conllevan ejecución presupuestal, como en las formalidades y requisitos que deben cumplir. De tal suerte que todos los actos administrativos que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad presupuestal en los términos de la Ley 38 de 1989 y 179 de 1994 orgánicas de presupuesto." (Subrayas fuera de texto).

Adicionalmente, reconocer las pretensiones que reclama la parte actora sin la autorización presupuestal requerida, implicaría que el ordenador del gasto estuviera inmerso en actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 734 de febrero 5 de 2002, que en sus artículos 22 y 23².

2. INTEGRACIÓN DE LITIS CONSORCIO NECESARIO

El Artículo 61 del C.G.P. determina:

"... Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hicieron así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes faltan para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

²ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la inercia en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de los consejos de exención de responsabilidad contemplados en el artículo 28 del presente ordenamiento (...).

*Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.**

Concordante con lo anterior, es necesario anotar, que en materia de competencia, conforme está consagrado en el artículo 150, numeral 19, literales E) y F) de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

En ejercicio de dicha facultad el Legislativo expidió la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual autoriza al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre estos los de la Rama Judicial.

De manera que es en virtud de lo establecido en la citada Ley, que la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, es quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia la Rama Judicial del Poder Público - Consejo Superior de la Judicatura, pues solo cumple sobre estos actos administrativos una vez expedidos por la autoridad competente, una función ejecutora, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales en los términos y valores establecidos de manera anual en cada tabla de salarios. Por lo dicho se estima que la defensa de legalidad de estos actos hoy demandados está en cabeza del ejecutivo.

Adicional a lo anterior, cabe destacar que a pesar de que no se demandan los Decretos que regularon la Bonificación Judicial y que de plano el Conjuez podría negar la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás entidades mencionadas, debido a que los actos sobre los cuales se va a ejercer control de legalidad fueron expedidos por la Dirección Ejecutiva o Dirección Seccional de Administración Judicial, **en caso de una eventual condena**, se debe tener en cuenta la imposibilidad material de la Nación – Rama Judicial de reconocer los derechos ahora reclamados, como se indicó en el anterior numeral, pues debe considerarse que en atención a lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al presupuesto de gasto sobre apropiaciones inexistentes, lo que significa que en el caso de acceder a las pretensiones de la demanda si está vinculada la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de paso se daría la orden a dicha cartera para que se hiciera la apropiación a favor de la Rama Judicial y así pagar la condena correspondiente sin que a futuro se puedan iniciar procesos ejecutivos por la falta de pago debido a que dicho Ministerio no hace el giro de los dineros suficientes para el rubro de sentencias y de gastos de personal.

Adicionalmente, resulta necesario tener en cuenta el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjuces, Exp. 2016-00375, Dte: Leonel Díaz Mora, en audiencia inicial celebrada el 27 de julio de 2018, en el cual aceptó el llamamiento en garantía de la Nación – Presidencia de la República, Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, bajo el argumento que estas entidades podrían eventualmente verse perjudicadas o beneficiadas con la

decisión que se tomara en el caso correspondiente a las reclamaciones salariales allí pretendidas.

Así las cosas, nótese señor Conjuez la necesidad de vincular a las entidades solicitadas.

Por ende, de manera cordial, le solicito a su señoría se sirva llamar como LITIS CONSORTE NECESARIO a la NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, representada por el Dr. IVAN DUQUE MÁRQUEZ, a la NACIÓN - MINISTRO DE HACIENDA, representada por el doctor ALBERTO CARRASQUILLA y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, representado por el doctor FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO, Director.

3. AUSENCIA DE CAUSA PETENDI.

Por mandato expreso de los Decretos 383 y 384 de 2013, **la bonificación judicial no tiene carácter salarial para efectos prestacionales**, sino únicamente para Seguridad Social en salud y pensiones, lo que significa que dicho emolumento no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, y en ese sentido, a la actora no le asiste causa para reclamar por vía judicial las declaraciones planteadas en el libelo introductorio.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se encuentra ceñida al ordenamiento jurídico y viene dando estricto cumplimiento a las normas que rigen al interior del Régimen Salarial y prestacional de los servidores públicos, con el único propósito de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo, por tanto, no es posible producir efectos jurídicos de carácter particular contrariando disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de controversia.

4. PRESCRIPCIÓN

En relación con la prescripción de los derechos prestacionales, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone: *"Las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en **tres años** contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual."*

En el presente caso ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la parte actora, que no fueron reclamados oportunamente, para tal efecto debe tenerse en cuenta que la parte demandante radicó la petición ante la Seccional Bogotá el **16 DE ABRIL DE 2018**, razón por la cual, las sumas reclamadas con anterioridad al **16 DE ABRIL DE 2015**, se encuentran prescritas.

Se debe indicar que se debe aplicar la prescripción trienal sobre las sumas de dinero que reclama la parte actora, pues se tratan de sumas de dinero que se causan sucesivamente, situación que por la inactividad de la parte demandante no deba afectar a la Rama Judicial, sino que por el contrario se sanciona haber dejado transcurrir dicho tiempo no solo de la

petición del pago de la prima especial como factor salarial, sino de la presentación de la demanda. Por lo tanto, solicito honorable Juez declare probada esta excepción.

5. INNOMINADA: Prevista en el inciso segundo del artículo 187 del C.P.A.C.A., esto es, *"sobre cualquiera otra que el fallador encuentra probada"*.

V. PRUEBAS

Comedidamente solicito al Honorable Conjuez, decretar las pruebas de oficio que considere pertinentes y útiles en el proceso y tener en cuenta los antecedentes administrativos adjuntos con el escrito demandatorio, que son: copia del derecho de petición, el acto administrativo enjuiciado, la constancia que incluye los tiempos de servicios de la parte demandante; razón por la cual, considero no es necesario allegarlos nuevamente, sin que se imponga sanción alguna, toda vez que lo que se pretende a través de lo allí dispuesto es la incorporación del expediente administrativo a fin de que el Juez de conocimiento, pueda examinar la génesis de la actuación administrativa impugnada.

Adicionalmente, resulta necesario indicar que los antecedentes administrativos ya obran dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se reitera, fueron allegados por la parte actora con la demanda y, por lo tanto, se solicita que en el momento procesal oportuno se le otorgue el valor probatorio correspondiente conforme a la ley, sin que se considere que existe una desatención a lo ordenado en el admisorio de la demanda.

VI. NOTIFICACIONES

1. Las recibiré en la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Calle 72 No.7-96, piso 8, Tel 5553939 Ext. 1078, celular 3163981547 e-mails: aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
2. Al Litis consorcio necesario, NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en la CARRERA 7 No. 6 – 54 de Bogotá, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
3. Al Litis consorcio necesario, NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA, en la carrera 8 No. 6 – 64 de Bogotá, notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co
4. Al Litis consorcio necesario, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en la Carrera 6 # 12-62 en Bogotá, notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Del señor Juez, cordialmente,



ANGÉLICA PAOLA ARÉVALO CORONEL
C.C. 1.018.406.144 de Bogotá
T.P. 192.088 del C. S. de la J.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DEAJALO20-7409

Bogotá D.C., martes, 13 de octubre de 2020

Señores

JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO BOGOTA

Bogotá - Cundinamarca

Asunto: Poder al doctor (a): **ANGELICA PAOLA AREVALO CORONEL**
Proceso No. **110013335011201900214-00**
Acción: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Demandante: **JOSEFINA OLAYA**
Demandado: **NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., identificada con cédula de ciudadanía No. 33.368.171 de Tunja, Directora Administrativa de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio de la función de representación judicial y extrajudicial que me fue delegada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial mediante Resolución No. 5393 de 16 de agosto de 2017, confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor(a) **ANGELICA PAOLA AREVALO CORONEL** abogado(a) de la División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con cédula de ciudadanía No. 1.018.406.144 y Tarjeta Profesional No. 192.088, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial, en el proceso de la referencia.

El (la) apoderado(a) queda facultado(a) para conciliar, desistir, sustituir, en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente la facultad de recibir.

Sírvase reconocerle personería.

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE

C. C. No. 33.368.171 de Tunja

Directora Administrativa División de Procesos

Acepto:

ANGELICA PAOLA AREVALO CORONEL

C.C.1.018.406.144 de Bogotá

T.P. No. 192.088 del C.S. de la J.

aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co

Iniciales de quien elabora: DCRM

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador – 3127011 www.ramajudicial.gov

Firmado Por:

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE



SC5780-4



**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEAJ
UNIDAD ASISTENCIA LEGAL DIVISIÓN DE PROCESOS**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

02955fb4a1df862fbac870e0c06fe77fce9744def4a2bdaa4291d7cf628e05f2

Documento generado en 19/10/2020 08:49:06 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



62

RESOLUCIÓN No. 5393 16 AGO. 2017

"Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, especialmente las conferidas por los artículos 209 de la Constitución Política, el artículo 9º al 12 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política dispuso que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a través, entre otros, de la delegación de funciones.
2. En virtud del Art. 9 de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de entidades públicas que poseen estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos conferidos por la ley, en los empleados públicos del nivel directivo o asesor vinculados al organismo.
3. Que el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, para lo cual podrá constituir apoderados especiales. Función que se ratifica en los artículos 149 del Código Contencioso Administrativo y 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. Que, a su vez, el numeral 7º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, asignó a los Directores Seccionales de Administración Judicial la función de representación judicial de la Nación – Rama Judicial, en su ámbito territorial, para lo cual podrán constituir apoderados especiales.
5. Que por lo anterior, el Director Ejecutivo de Administración Judicial ejerce la función en mención en el ámbito territorial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.
6. Que en aras de privilegiar los principios de la función pública de eficacia, economía y celeridad, se hace necesario delegar la función de representación judicial y extrajudicial dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en que sea parte la Nación – Rama Judicial, que corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial, citada en el numeral anterior.

En mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3 127011 www.ramajudicial.gov.co



Hoja No.2 de la Resolución No. 5393 de 16 AGO. 2017 "Por la cual se delega la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial"

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar en el (la) Director(a) Administrativo(a) de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la función de representación judicial y extrajudicial de la Nación – Rama Judicial ante las autoridades de la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación, en los procesos o procedimientos en los cuales la Nación – Rama Judicial intervenga como parte o tercero, que se adelanten en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas, facultad que se extiende a toda clase de actuaciones y diligencias que se presenten ante dichas autoridades.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio de la función delegada, el (la) funcionario (a) delegado (a) deberá conferir poderes a los abogados de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que ejerzan la defensa de los intereses de la Nación – Rama Judicial en el ámbito territorial mencionado en el numeral anterior, con las facultades previstas en el artículo 77 de Código General del Proceso, inclusive la de conciliar en los precisos términos fijados por el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pero no tendrán la facultad de recibir.

ARTÍCULO TERCERO.- Salvo lo dispuesto en el numeral anterior, la disposición de los derechos litigiosos de la Nación – Rama Judicial queda prohibida, sin la autorización previa, escrita y expresa del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá D.C., el

16 AGO. 2017

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO

Elaboró: Betsy Yohana Puentes Duarte – Directora Administrativa - División de Procesos
Revisó y Aprobó: Pedro Julio Gómez Rodríguez – Director Unidad Asistencia Legal



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RESOLUCIÓN NO. 7361 03 NOV. 2016

Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E):
En ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con el Acuerdo No. PSA16-10595 de 2016 proferido por la H. Sala Administrativa.

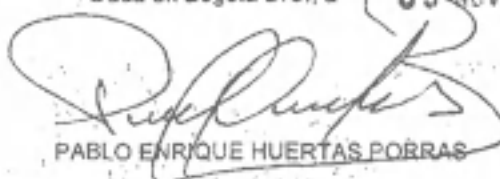
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar en propiedad a la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No.33.368.171, en el cargo de Director Administrativo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a

03 NOV. 2016


PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS

Elaboró: Lilia CG
Revisó: RH Judith Morante García

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

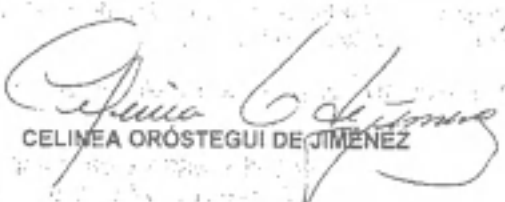
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de noviembre de 2016, se presentó al Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.368.171, con el fin de tomar posesión del cargo al cual fue nombrada, en propiedad, de Director Administrativo de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Prestó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

Con efectos fiscales a partir del 1º de diciembre de 2016.

LA DIRECTORA EJECUTIVA


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ

LA POSESIONADA


BELSY YOHANA PUENTES DUARTE